

Diálogo de sordos

El anunciado, y momentáneamente suspendido, aumento de los precios de la gasolina y demás derivados del petróleo en el mercado interno venezolano provocó una fuerte reacción de la opinión pública, protestas a lo largo y ancho del país y la decisión gubernamental de posponer la medida. La situación que se ha generado alrededor del aumento o no de los precios de la gasolina es un buen indicador de las relaciones políticas y sociales del país.

La sociedad venezolana es consciente en todos sus niveles de la necesidad de tomar decisiones sobre su futuro inmediato y a largo plazo. No estamos en un momento de ajustes, por fuertes que sean, para continuar la ruta anterior; estamos decidiendo el rumbo futuro de la sociedad venezolana. Estamos dándole contenido a una nueva etapa del proceso modernizador, cumplidas, con luces y sombras, las anteriores. Un momento en el que el diálogo es un instrumento insustituible para fijar metas y avanzar hacia ellas. Lo que hemos vivido en estas semanas se asemeja, sin embargo, a un diálogo de sordos.

PARA QUIEN SE JUSTIFICA EL AUMENTO DE LA GASOLINA

Este es el primer nivel de discusión del asunto. El anunciado aumento ha sido justificado por parte del gobierno como una medida coherente con el conjunto de ajustes —(a) Paquete— de la economía que se llevan a cabo. Forma parte de los compromisos asumidos en la Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional, por tanto, del conjunto de argumentos sobre los cuales se fundamentó el plan de refinanciamiento de la deuda externa. En esa línea se sitúan las razones, poco convincentes, reiteradas por el Presidente C.A. Pérez: lo bajo que son los precios internos de los combustibles, la necesidad de equipararlos con los de los otros países... etc.

Detrás de esta justificación hay una intención fiscalista. El gobierno necesita con urgencia disminuir el déficit de su presupuesto. Prefiere, por razones políticas (es decir, para no enfrentar los poderes dominantes en la actual circunstancia venezolana), no acudir al expediente obvio que es mejorar la recaudación de los impuestos ya existentes, ni, menos aún, realizar una reforma tributaria que peche a los sectores de mayores ingresos. Opta, entonces, por la vía más fácil: aumentar los precios de la gasolina o sea un impuesto a toda la población que, por una parte, es lo suficientemente grande como para resolver el problema presupuestario y, por la otra, no crea problemas políticos en esos sectores de mayor capacidad de presión.

Este uso de los precios de la gasolina como fuente fácil de ingresos para el gobierno tampoco es original. Es lo que hacen casi todos los países del occidente capitalista. Así, mientras la gente cree que los beneficiarios directos de los altísimos precios del combustible son los países de la OPEP, los gobiernos, "con

escapulario ajeno", resuelven su problema fiscal. Es, pues, otra de nuestras formas de "internacionalizarnos" a costillas de los menguados ingresos populares, fortaleciendo la nueva alianza de poder dentro del sistema político venezolano, dominada por el "empresariado privado".

Para ellos se justifica el aumento

REACCIÓN POPULAR CONTRA LA ESPECULACION

Sin embargo, el gobierno no fue capaz de prever la reacción generalizada en contra de la medida. Hasta el partido Acción Democrática —"partido de gobierno"— y el propio Congreso de la República se pronunciaron en contra. La gente común percibió que detrás de ese aumento se escondía una injusticia. Entendió que era sacarle más recursos de su bolsillo para aumentar las arcas de un Estado que tiene muchas otras alternativas.

Por eso el malestar y las protestas de una mayoría que no le encuentra justificación al aumento.

Pero, además, todo el mundo sabe que el aumento de la gasolina provocaría una ola de especulación en los precios al consumidor y que el gobierno ha demostrado su incapacidad para controlar esos brotes especulativos.

La declaración del Presidente Pérez sobre la imposibilidad de su gobierno de "acabar con las roscas" alimentarias ha sido correctamente interpretada por la opinión pública como la renuncia por parte de este gobierno a controlar los abusos en los precios. Ejemplos de cómo el simple anuncio de los aumentos de la gasolina provocaron las ansias incontroladas de especulación podríamos poner a granel, y cada lector puede añadir algunos más: la pintura, el papel, los pasajes de autobuses, los taxis, los repuestos, los vehículos automotores, los alimentos, las bebidas...

A este nivel, un diálogo de sordos

EL PUEBLO TIENE DERECHO A PROTESTAR

Los voceros del gobierno y del orden establecido (Gonzalo Barrios, por ejemplo) reconocen no sólo que el pueblo tiene derecho a protestar en abstracto, sino también que hay motivos de sobra para hacerlo. Sea cual sea la evaluación que se haga de la aplicación del conjunto de medidas en el año y pico que llevamos de gobierno, es evidente el enorme costo que han significado para el pueblo.

A ello se debe el generalizado malestar que se percibe en el ambiente. Existe un desasosiego. Normalmente marcado con la sensación de impotencia. En ocasiones cada vez más frecuentes convertido en verdadera angustia: qué hacer con los enfermos,

niños, adultos o ancianos, con los tratamientos de males crónicos (diabetes...), qué hacer con la amenaza de la desnutrición crónica, con el deterioro galopante de la educación, cómo conseguir vivienda... Impotencia y angustia que se viven con igual intensidad entre los sectores medios y entre los sectores populares.

El desasosiego, la impotencia y la angustia, desembocan fácilmente en protestas de diversos tipos.

Sin embargo, ese reconocimiento al derecho y a las razones para la protesta no significa que se escuchen los reclamos. Diálogo de sordos. A pesar de que el Ministro (e) de Relaciones Interiores, Nerio Rausseo, declara que las protestas e, incluso, los disturbios no son obra de los grupos de ultraizquierda, los voceros del orden, como el mencionado Dr. Barrios, vuelven con la cantinela de la existencia de "agitadores profesionales" detrás de esas reacciones populares.

Expediente, por cierto, nada novedoso que se sigue utilizando a mansalva: el propio Dr. Barrios debe recordar cómo lo usó el General López Contreras en 1936 para neutralizar la acción de la autodenominada Izquierda Democrática a la cual, junto con Rómulo Betancourt, Rómulo Gallegos, Luis Beltrán Prieto, Raúl Leoní...etc., pertenecía. Cuando se trata de defender el orden establecido falla la memoria histórica y se pierde la lucidez histórica, intelectual y hasta política.

Seguimos ante un diálogo de sordos.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y REPRESION

Hasta los más optimistas defensores del paquete de ajustes macroeconómicos reconocen que las repercusiones negativas en la calidad de vida, niveles de ingresos de las mayorías... etc., de su aplicación, trae como consecuencia un aumento de la tensión y de la conflictividad social.

En un primer momento se pretendió neutralizar esas tensiones a través del liderazgo político del propio Presidente Pérez, de Acción Democrática, y abusando de la lealtad demostrada por el pueblo venezolano al sistema democrático de partidos. También aquí se demostró lo que venimos llamando el diálogo de sordos. En el lenguaje político populista, la lealtad al sistema funciona como un mecanismo clientelar. El liderazgo partidista creyó que podía hacer pagar al cliente sin entregarle la mercancía, es decir, que podían desmejorarse rotundamente los niveles de vida de la población sin amenazar la estabilidad política y sin que aumentara la conflictividad social.

Por eso, la explosión popular del 27 de febrero de 1989 los agarró a todos de sorpresa. Y a pesar de todas las evidencias siguen creyendo, hoy más que hace un año, en que fue una provocación de la subversión contra el sistema democrático. El haber descubierto el cristal neoliberal, por el cual se traspasará la economía nacional al sistema capitalista internacional, para mirar la realidad, ha hecho que nunca vean la situación, ni mucho menos perciban el derrumbe de

las expectativas de la población ajustada.

Con esta percepción de la realidad, el poder político del orden establecido resolvió que la manera más efectiva de enfrentar la conflictividad social era la represión. Hemos, entonces, experimentado cómo la sociedad venezolana se va haciendo cada vez más represiva y reprimida. No se puede pensar sino como los "neoliberales". Otras formas de ver la realidad son tachadas de atrasadas, caducas o fracasadas. Las condiciones económicas obligan a dedicar todas las energías disponibles a la supervivencia cotidiana, desestimulando toda participación social o política, y, por si acaso, se han equipado y mejorado los cuerpos represivos del Estado.

En este diálogo de sordos que venimos comentando, la resolución más clara de la dirigencia política venezolana después de la explosión de febrero 89 no tuvo nada que ver con evaluar los efectos sociales del proyecto en marcha, más bien se aceleró en la misma dirección, sino que decidieron que la próxima no los agarraba desprevenidos. Con el malestar, protestas y disturbios provocados por los anuncios de aumento se evidenció esta respuesta: la policía y la Guardia Nacional ocuparon las calles sin contemplaciones. Sin embargo, esos mismo cuerpos policiales no son capaces de detener el auge delictivo que mantiene atemorizada a la población venezolana.

QUIEN DECIDE

La medida del aumento se postergó. El gobierno, entonces, puede argumentarse, escuchó al pueblo. Más bien parece que se agazapó a esperar mejor oportunidad de dar este paso.

En todo caso se puso de manifiesto un problema de fondo: quién decide en la sociedad venezolana o, mejor, quién se constituye como el sujeto político en este momento de nuestro proceso social.

Posponer la medida es un nuevo esfuerzo por mantener las riendas. De hecho no se ha escuchado al pueblo porque, en absoluto, se ha cuestionado el fundamento de la medida, ni renunciado a ponerla en práctica en otra ocasión más oportuna. Más bien se ha enfatizado el mensaje de quiénes son los que deciden en Venezuela.

La desazón y brotes de protesta popular indicaron la necesidad de organización de una sociedad civil capaz de expresar y defender no sólo sus derechos sino sus expectativas sobre lo que debe ser la sociedad venezolana que se gesta. Pusieron, también, otra vez de manifiesto la debilidad organizativa de la sociedad civil, del pueblo venezolano. Pero dejaron claro, igualmente, su disposición a hacerse oír aunque los otros no quieran hacerlo.

Convertir esta situación en la posibilidad, a través del diálogo y no de la confrontación, de gestar un auténtico proyecto nacional para el futuro venezolano es la mayor responsabilidad de la dirigencia política en el presente.